REVISTA

VISOR

CARTAGENA: NUEVAS VISIONES, MIRADAS CERCANAS

CARTAGENA DE INDIAS - PUBLICACIÓN SEMESTRAL, JULIO 2019 - 4ª EDICIÓN

Vivir del Mercado de Bazurto

La metamorfosis de Getsemaní

El negocio del humo en las faldas de La Popa

ESPECIAL

Los Chamos en Cartagena

Universidad Tecnológica de Bolívar
CARTAGENA DE INDIAS
Programa de Comunicación Social

ESTA ES UNA PUBLICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

REVISTA

VISOR

Rector
Alberto Roa Varelo

Vicerrector Académico
Daniel Toro González

Vicerrectora Admistrativa
María del Rosario Gutiérrez de Piñeres

Decano
Juan Camilo Oliveros

Directora de programa
Marelbi Olmos

Edición periodística
Tatiana Velásquez Archibold

Concepto gráfico
Gina Zabaleta Puello

Redacción periodística
Duván Álvarez
Daniela Ortiz
Yordi Alcalá
Sharon Mejía
Cindy Altamar
Camila De la Ossa
Arvelys Florián
Alexandra Villarreal
Mauricio Perez
Rosa Zapata
Andrea Valiente
Maria Camila L'Hoeste Contreras
Laura Montaña
Andrea Sotomayor
Martín Carvajal Chamorro
Leonardo Domínguez
Yeimy Bula
Angie Peláez
María Alejandra Romero
Diorka Martínez
Daniela Morad
Maryjames Martelo

Diagramación y maquetación
Juan Barceló
Luis Soto
Andrés Garrido
Julieth Pereira
Daniela Racero
Luis Bosa
Juan Manuel Ulloque
Daniela Pérez
María José González
María Caballero
Hillary Llanes
Andrea Salas
Dana Cantillo
María Angélica Palacios
Ayda Beltrán
Lenuzka Sierra
Sara Vargas
Adriana Bonilla
Daniela Rodríguez
Edwin López
Mary Quiñones
Olivia Jiménez
Jessica García
Aura Romero

Ilustración
Liceth Lora

RENACE VISOR:
Nuevas visiones, miradas cercanas.

Regresa la revista Visor, el medio de comunicación de los estudiantes del programa de Comunicación Social (CSOC) de la UTB.

Después de ocho años de circulación del último número, son muchas situaciones vividas en el programa, la Universidad Tecnológica Bolívar y la ciudad de Cartagena.

Y precisamente en esos últimos sucesos ocurridos en la ciudad es en lo que se fundamenta este nuevo número de relanzamiento de nuestra revista Visor en la que, a través de diferentes temáticas desarrolladas por los estudiantes en los cursos del programa, plantean de manera seria y directa los hechos relevantes de la ciudad, que se configuran desde la realidad local, mostrando los grandes retos que tenemos quienes vivimos y transitamos en La Heroica.
En este ejercicio de mostrar los aciertos y desafíos de Cartagena, los estudiantes reconocen la responsabilidad que tienen como habitantes de una ciudad que requiere del esfuerzo conjunto para solucionar las problemáticas que la aquejan.

Como futuros profesionales del periodismo y la comunicación social, nuestros estudiantes declaran desde este espacio su compromiso con la ciudad; su interés por dar a conocer y evidenciar con datos exactos e información contrastada, los hechos que interesan al ciudadano y al visitante, recordando especialmente que Cartagena es la ciudad con mayor proyección internacional de Colombia, pero también como una de las ciudades con mayores índices de desigualdad social y de pobreza, según la Medición divulgada en julio de 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Esta cuarta edición de Visor, narra las asignaturas pendientes de Cartagena en gobernabilidad, infraestructura, cultura ciudadana y luchas por el territorio de una urbe que no es visible ante los reflectores nacionales e internacionales e incluso locales.

Estimado lector, en este Visor encontrarás historias acerca de las luchas por el territorio en diferentes sectores; el creciente reto de las autoridades ante los índices y la percepción de inseguridad de los ciudadanos; los desafíos en materia de infraestructura; el proceso de gentrificación del centro amurallado; el fenómeno migratorio de extranjeros e historias de vida de quienes habitan el tradicional mercado de Bazurto, entre otros temas.

Esta es una nueva etapa de circulación semestral de la Revista Visor que recopilará las historias, que desde el aula, contarán nuestros estudiantes y docentes para mostrar la ciudad que tiene todo el potencial para ser realmente fantástica.

Marelbi Olmos P.
Directora Programa Comunicación Social
Universidad Tecnológica de Bolívar - Cartagena

1

Cartageneros se sienten más *seguros* con restricción del parrillero

María Camila L´hoeste Contreras

Página 5

Cartageneros se sienten más *inseguros* que paisas, caleños y bogotanos

Leonardo Domínguez Márquez

Página 7

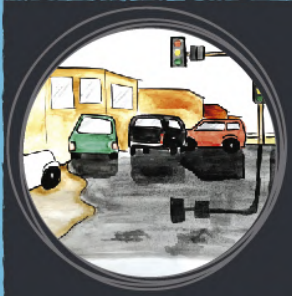
2

3

La batalla contra el olvido de *Isla de león*

Arvelis Florían y Alexandra Villareal

Página 10



El drenaje pluvial, un *mal* crónico de La Heroica que también golpea al sector turístico

Mauricio Pérez, Rosa Zapata y Andrea Valiente

Página 12

4

5

Copropietarios de Aquarela: Más de dos años en el *limbo*

Martín Carvajal

Página 16

El negocio del *humo* en las faldas de La Popa

Sharon Mejía, Camila De la Ossa y Cindy Altamar

Página 19

6

7 La metamorfosis de Getsemaní
Yordi Alcalá Página 22

8 La lucha por el territorio en La Boquilla
Yeimy Bula y Angie Peláez Página 27

9 Vivir del mercado de Bazurto
María Alejandra Romero Solano Página 29

10 El rebusque de un venezolano en Cartagena
Laura Montaña y Andrea Sotomayor Página 33

11 El crimen en Cartagena no es culpa del venezolano
Duván Álvarez y Daniela Ortíz Página 36

12 El alto precio de vivir lejos de la Venezuela chavista
Daniela Morad, Diorka Martínez
Duván Álvarez y Meryjames Martelo Página 39

Cartageneros se sienten más SEGUROS con restricción del parrillero

En barrios en los que rige el decreto de prohibición del pasajero en moto, la percepción de inseguridad cayó del 27% al 10%, según 'Cartagena, cómo vamos'.

*María Camila L´hoeste Contreras**

Los barrios cartageneros en los que rige la prohibición del parrillero en moto presentan mejores indicadores de percepción de seguridad que aquellos en los que el pasajero está permitido. En esas zonas la percepción de inseguridad cayó del 27% al 10%, según el último informe de 'Cartagena, cómo vamos', socializado el 13 de febrero de este año.

La percepción de inseguridad entre los cartageneros se debe a la presencia de pandillas en los barrios, los atracos en moto y la venta de drogas.

Ese informe deja un balance negativo sobre la percepción que tienen los cartageneros de la seguridad en sus barrios. De las 1.023 personas encuestadas, el 37% respondió sentirse inseguro en ellos. Dicha sensación no ha disminuido desde 2016, por el contrario aumentó cuatro puntos porcentuales en la encuesta de 2017 y un punto porcentual en la de 2018.

Justamente, la Alcaldía Distrital expidió en septiembre de 2016 el Decreto 1424 para restringir la circulación del parrillero en moto en siete barrios de Cartagena, como una medida para mitigar la delincuencia, debido al uso frecuente de las motos en delitos como los homicidios y los hurtos.

Cristina López, residente de Los Alpes, barrio que presenta denuncias frecuentes por atracos, dijo a este medio que la medida del parrillero le parece efectiva y considera que la Alcaldía debería extenderla a otros barrios de la ciudad.

"Si funciona en otros barrios, también quiero que funcione en el mío para andar por las calles más tranquila", dijo.

Las motos no son el único factor que afecta la percepción. La sensación de inseguridad también obedece a la presencia de pandillas en los barrios. Por eso, voceros de la Policía Metropolitana de Cartagena y de la Secretaría del Interior han manifestado, a través de distintos medios de comunicación, estar apostándole a sacar de la delincuencia a un número significativo de jóvenes, como lo lograron en 2018 con los pactos de paz y dejación de armas de seis pandillas locales.

La Alcaldía Distrital expidió en septiembre de 2016 el decreto 1424 para restringir la circulación del parrillero en moto en siete barrios de Cartagena.

"En Cartagena hay 646 frentes de seguridad avalados por la Policía y solo 120 de ellos cuentan con alarmas comunitarias"

MÁS MEDIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA

Como una medida más para frenar la inseguridad e impactar positivamente en la percepción de los ciudadanos, Distriseguridad, entidad pública que trabaja por la convivencia y la seguridad en Cartagena, inició un proceso licitatorio para adquirir un sistema de alarmas comunitarias.

De hecho, el alcalde encargado Pedrito Pereira aseguró que la adquisición de nuevas alarmas es una "necesidad imperante de los barrios". La actual administración distrital espera cerrar este año con 200 alarmas funcionando.

"En Cartagena hay 646 frentes de seguridad avalados por la Policía y solo 120 de ellos cuentan con alarmas comunitarias", dijo el mandatario.

**Historia desarrollada como parte de la clase de Gestión de Contenidos Web 2019-I*

CARTAGENEROS se sienten más inseguros que paisas, caleños y bogotanos

El 37% de los encuestados por 'Cartagena, cómo vamos' dijo sentirse inseguro en sus barrios. ¿La razón? Los atracos callejeros, la presencia de pandillas y la venta de drogas en expendios, conocidos como 'ollas' de vicio.

*Leonardo Domínguez Márquez**

Es una realidad, los cartageneros se sienten más inseguros en sus barrios que los paisas, caleños y bogotanos. Basta con analizar las cifras publicadas por la Encuesta de Percepción Ciudadana de la Red Ciudades Cómo Vamos, para darse cuenta que el 37%, de los 1.023 cartageneros encuestados vive en constante sensación de inseguridad.

En las tres localidades que tiene La Heroica nadie se salva de sentirse en constante amenaza. Así lo señalaron los residentes de la localidad Industrial y de la Bahía con un 47%, los del Caribe Norte con un 38% y los de la localidad de La Virgen y Turística con un 28%.

Según los datos de 'Cartagena cómo vamos', la percepción de inseguridad se fundamenta en los atracos callejeros (56%), en la presencia de pandillas (43%) y en la venta y consumo de drogas (24%).

Imagen tomada de bucefalopsico.blogpost.com

Esa percepción de inseguridad no está alejada de las cifras. Estadísticas del Centro de Observación y Seguimiento al Delito de la Alcaldía (Cosed) muestran un incremento de los atracos en un 200%: Cartagena pasó de 2.507 denuncias en 2017 a 7.803 en 2018.

Los atracos aumentaron un 200%: Cartagena pasó de 2.507 ***denuncias*** en 2017 a 7.803 en 2018, según el Cosed de la Alcaldía.

Ante los hechos, no falta la chanza y el jolgorio entre los cartageneros, quienes sacan a relucir su casta humorística. Por lo menos, así lo demuestra 'El Fontanero', un youtuber popular que hace su aparición semanal en un canal llamado 'El Grifo Noticias'.

"Aquí roban a la hora que sea, en los barrios de los pobres, pero también en los de los ricos. En cualquier momento una pandilla llega a tu casa y te quita lo que tienes. No hay derecho", dijo el personaje en uno de sus videos.

"Aquí roban a la hora que sea, en los barrios de los pobres, pero también en los de los ricos. En cualquier momento una pandilla llega a tu casa y te quita lo que tienes. ***No hay derecho"***, dijo 'El Grifo Noticias' en uno de sus videos en Youtube.

ACCIONES CONTRA LA DELINCUENCIA

Ante la problemática de pandillas y drogadicción, algunos sectores de la población han optado por tomar la iniciativa y resocializar a los jóvenes que delinquen en estos grupos urbanos. Ejemplo de esto fue el acto de paz y reconciliación, realizado el pasado 17 de febrero por 50 jóvenes pertenecientes a la pandilla 'Las Águilas' del barrio Loma Fresca. En la actividad, que fue impulsada por una comunidad cristiana de la zona, los jóvenes cambiaron sus armas por escrituras religiosas.

La sensación de inseguridad no solo se evidencia en la Encuesta de Percepción Ciudadana de 'Cartagena cómo vamos', también en iniciativas distritales que buscan escuchar y atender las problemáticas de la comunidad. Se trata de los Consejos Comunitarios de Seguridad, impulsados por el alcalde encargado Pedrito Pereira Caballero y su secretario del Interior, José Carlos Puello.

El primero de estos consejos fue realizado el 24 de enero de este año en el barrio El Cairo. Los residentes del sector denunciaron los recurrentes hechos delictivos que afectan el bienestar de la comunidad.

"La idea es articular el trabajo con otras dependencias distritales, empresas y entidades que se deben sumar a la lucha contra la delincuencia", sostuvo Puello Rubio en declaraciones al portal mundonoticias.com.

"La idea es articular el trabajo con otras dependencias distritales, empresas y entidades que se deben sumar a la lucha contra la ***delincuencia***", le dijo José Carlos Puello al portal mundonoticias.com.

El Gobierno local, además, solicitó en febrero de este año al Ministerio de Defensa el aumento del personal policial y militar en la ciudad, petición que fue concedida. En un reciente Consejo de Seguridad, el secretario Puello anunció que hombres de la Infantería de Marina ya empezaron a respaldar los operativos de seguridad realizados por la Policía en la ciudad.

**Historia desarrollada como parte de la clase de Gestión de Contenidos Web 2019-I*

LA BATALLA CONTRA EL OLVIDO de Isla de León

Los habitantes de este sector cartagenero son tan ignorados que cuando los líderes solicitan intervención, el Distrito los señala de invasores.

*Arvelys Florián y Alexandra Villarreal**

La primera vez que los habitantes de Isla de León, en Cartagena, supieron qué era una función cinematográfica fue hace cuatro años, cuando el Festival Internacional de Cine de esa ciudad llevó el programa 'Cine en los Barrios' a ese sector.

Los productores querían enseñarle a la comunidad que existe un mundo de historias más allá de los melodramas que transmiten a diario los canales nacionales de televisión privada. Esa proyección no solo se dio en uno de los sectores más pobres e ignorados por las autoridades cartageneras sino que se convirtió en un oasis para que la gente olvidara, por un par de horas, su dura realidad.

Isla de León es un asentamiento sumido en la pobreza, ubicado en el suroriente de Cartagena, a pocos metros de la Ciénaga de la Virgen y en el traspatio de uno de los sectores más pobres de La Heroica, El Pozón.

Allí las casas de madera están extendidas sobre un terreno que hace apenas unos años era un completo lodazal, donde solo se podía caminar con los pies descalzos.

Para llegar a Isla los habitantes deben atravesar un caño de aguas putrefactas llamado Caño Limón, en el que flotan pilas de basuras, podas y hasta zapatos. Pueden cruzarlo por un puente improvisado de madera o por uno de concreto, la única obra construida en ese material en el asentamiento.

Los moradores de Isla batallan a diario contra el olvido. Buscan que el Distrito cartagenero los reconozca como un barrio más de la ciudad porque hoy, 20 años después de su fundación, sigue sin aparecer en el mapa de Cartagena.

Fotografía tomada de mundonoticias.com.co

PRIMEROS COLONOS

Los primeros cambuches de Isla de León se remontan a finales de los años noventa,cuando un grupo de desplazados por el conflicto armado colombiano -procedente de distintas regiones del país- llegó buscando un pedazo de tierra en paz. Con el paso de los años, más y más personas comenzaron a habitar Isla de León. Hoy son unas 1.000 personas distribuidas en 16 calles, con nomenclatura informal, deficiente servicio de energía eléctrica, sin alcantarillado y sin acceso a agua potable.

Apenas logran sobrevivir con 20.000 pesos diarios, obtenidos en cualquier trabajo informal o 'maraña' que surja, cuenta una de las líderes del sector, Merlys Valdéz, quien vive allí desde hace ocho años.

Pese a tener dos décadas de existencia, el Gobierno cartagenero sigue sin reconocerlo como un sector de la ciudad porque considera que esas familias deben ser reubicadas en zonas con mejores condiciones.

Tan ignorados son que cuando los líderes del sector solicitan algún tipo de intervención, en las entidades distritales les sacan a relucir su estatus de invasores.

Sin embargo, no existe un plan de reubicación concreto para mejorarles a mediano plazo la vida a estas personas, mucho menos con la crisis de gobernabilidad que atraviesa Cartagena.

María Bernarda Pérez, funcionaria de la Secretaría de Planeación Distrital, explicó que en el pasado el Distrito desalojó a varias familias de allí porque estaban sobre una zona inundable, pero al poco tiempo el sector volvió a poblarse.

Una muestra más del círculo vicioso de la pobreza que no parece tener solución en una ciudad históricamente desigual como Cartagena.

"Si no podemos vivir en Isla, no podemos vivir en ningún otro sector de Cartagena, porque en todas partes es lo mismo", dice Merlys al referirse a las zonas a las que gente como ella, con pocos recursos económicos, tendrían acceso si deciden mudarse.

Se refiere a otras barriadas, igualmente pobladas sin planificación alguna, a orillas de la Ciénaga de la Virgen -que conforman uno de los cinturones de miseria más grandes de Colombia-, donde pululan las necesidades y en los que también hay zonas en riesgo de inundación.

Pese a tenerlo todo en contra viviendo en Isla de León, habitantes como Merlys sienten que ese pedazo de tierra es lo único con lo que cuentan y lo único que los hace sentir parte de Cartagena.

MANOS AMABLES

Por eso, trabajan para hacerlo más habitable, de la mano de la Fundación Techo,entidad chilena sin ánimo de lucro que desde hace más de 10 años les da una mano para mejorarles sus viviendas.

Hasta ahora esa organización ha construido 110 casas con materiales como madera,plástico y zinc. La mayoría de ellas están edificadas sobre unas bases llamadas 'tambos', que les dan mayor firmeza porque el terreno es pantanoso y suele ser movedizo en época de lluvias.

El trabajo de Techo en Isla de León ha sido posible gracias al voluntariado de decenas de jóvenes.

Uno de ellos, María José Castillo Mosquera, quien se siente satisfecha al saber que ha ayudado a cambiarles la vida a varias familias con la construcción de viviendas más dignas. Su felicidad aumenta más cuando regresa a Isla y es recibida con los brazos abiertos.

> **"Muchas veces ellos te brindan cosas que no tienen. Es bonito. Es bonito ver los lazos que creas."**

Mientras organizaciones como Techo y el Festival de Cine de Cartagena les dan la mano a los habitantes de Isla de León, ellos siguen en pie de lucha para ser reconocidos como moradores de un barrio y no de una invasión.

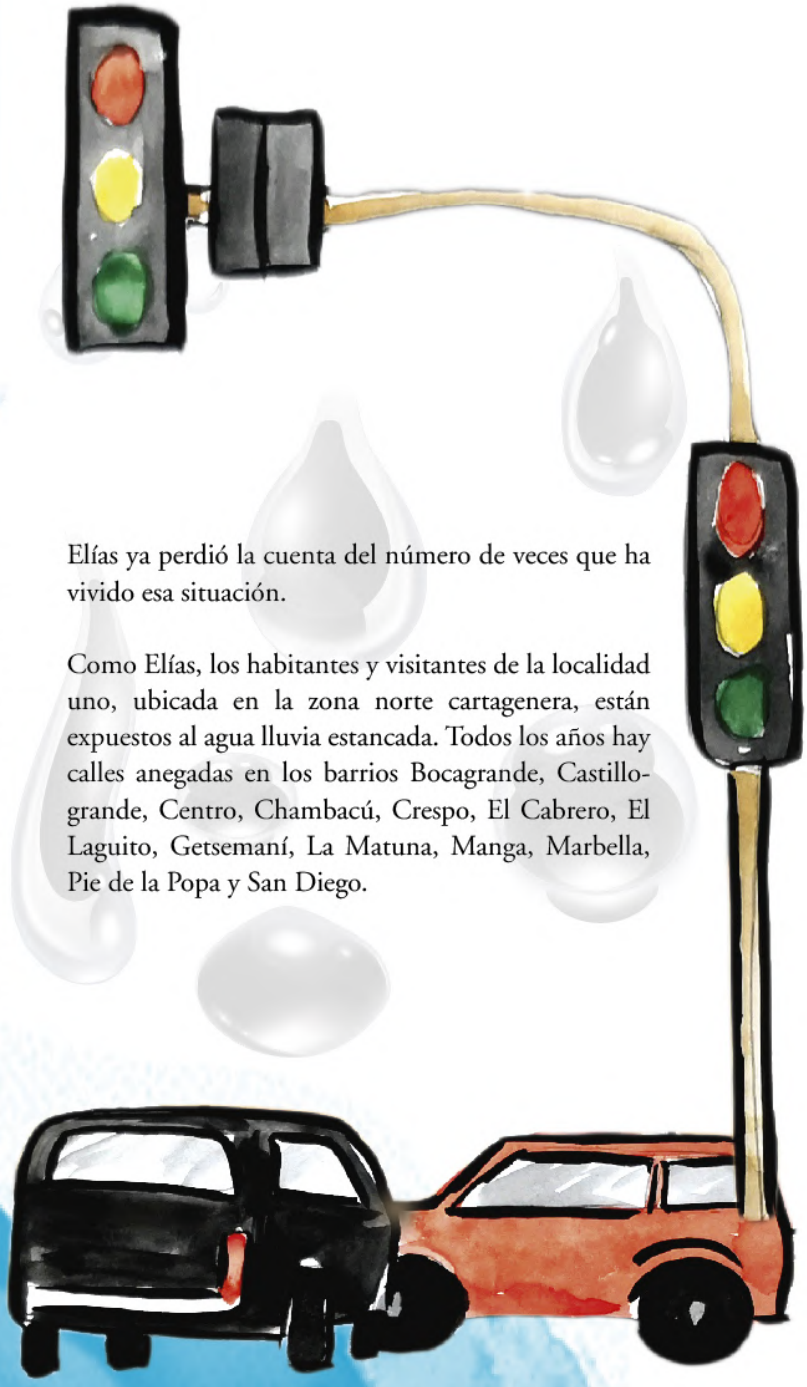
Aunque son conscientes de las condiciones pantanosas del terreno que habitan, no descansarán hasta ser incluidos en la cartografía cartagenera. Buscan que la Alcaldía mire hacia esa 'isla' olvidada, que está bien al sur de la ciudad, adonde los turistas no llegan.

Historia desarrollada como parte de la clase de Gestión de Contenidos Web 2018 - I

El drenaje pluvial, un *mal crónico* de La Heroica que también golpea al sector turístico

Durante décadas, las calles de la zona turística se han inundado con cada aguacero. Por ahora, ese problema de infraestructura seguirá siendo parte del paisaje del Corralito de Piedra porque todavía no se vislumbra una solución de fondo.

*Mauricio Pérez, Rosa Zapata y Andrea Valiente**



Como calurosa, húmeda, molesta, caótica y hasta indeseable describe Elías a su ciudad. Ya se acostumbró a que casi nada funcione en ella. Su desolación por el desorden cartagenero aumenta aún más en época de lluvias, cuando el nivel del agua sube tanto en las calles de su barrio Bocagrande que por momentos amenaza con sobrepasar sus rodillas.

En una mañana lluviosa, Elías suele salir de su casa con la mejor actitud para comenzar su jornada laboral. Pero el genio le cambia después de chapotear, durante 10 minutos, entre las aguas estancadas para llegar al paradero de Transcaribe más cercano. Fastidiado, despeinado y con los zapatos y parte del pantalón mojados, se monta al alimentador que lo transportará hacia su oficina.

Elías ya perdió la cuenta del número de veces que ha vivido esa situación.

Como Elías, los habitantes y visitantes de la localidad uno, ubicada en la zona norte cartagenera, están expuestos al agua lluvia estancada. Todos los años hay calles anegadas en los barrios Bocagrande, Castillogrande, Centro, Chambacú, Crespo, El Cabrero, El Laguito, Getsemaní, La Matuna, Manga, Marbella, Pie de la Popa y San Diego.

Las inundaciones, que no son exclusivas de esa localidad, son uno de los principales problemas de infraestructura que afronta Cartagena por la falta de un alcantarillado pluvial para la evacuación del agua lluvia. Por eso, durante cada temporada invernal también es usual que amanezcan inundados barrios como Villa Rosita, El Socorro, Olaya y El Pozón -poblados en el extremo opuesto de Bocagrande y pertenecientes a las otras dos localidades de la ciudad.

Esas inundaciones en la zona Histórica y del Caribe Norte son más visibles por tratarse del sector de Cartagena aclamado internacionalmente por su patrimonio arquitectónico. En esas calles, además, se estanca el agua de mar cuando la marea sube.

EL PROBLEMA DEL DRENAJE PLUVIAL

El padecimiento de Elías tiene sus orígenes hace más de 25 años cuando el sistema de drenaje de Bocagrande dejó de dar abasto por el crecimiento desmedido y sin planificación de ese sector turístico. Especialmente, porque con la construcción masiva de edificios, son cada vez menos las zonas verdes en ese barrio para que el agua percole. Además, la topografía cartagenera no facilita la escorrentía de las aguas.

Las zonas verdes juegan un papel fundamental en el drenaje, pero la falta de cultura ambiental de la ciudad y de control urbano han facilitado que extensas zonas de vegetación hayan sido reemplazadas por pavimento. Una realidad en contravía de investigaciones como las del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la ciudad argentina de Rosario, que muestran que las áreas verdes deben mantenerse sobre todo en tierras inundables.

Además del acelerado crecimiento urbano, como sucede en Bocagrande, en el resto de la ciudad también se estanca el agua debido a los barrios construidos sobre zonas de retiro y cauces; a las desviaciones del cauce natural de los caños; a la acumulación de basuras y a la elevación de las mareas.

Por eso, ya se volvió costumbre que después de las lluvias muchas calles cartageneras queden inundadas durante días. Con el agua estancada se dificulta la movilidad de vehículos y peatones, y se multiplican las amenazas para la salud pública por los criaderos de insectos transmisores de enfermedades como el dengue.

PLAN MAESTRO PLUVIAL, LA GRAN SOLUCIÓN

No existe una solución única para mejorar el sistema de drenaje en Cartagena. Un grupo de acciones diversas, tanto de infraestructura como de medio ambiente, mitigaría el problema, dice Alfredo Pineda, un ingeniero civil y sanitario que se ha especializado en estudiar ese problema de la ciudad.

Pineda propone rehabilitar las estaciones de bombeo para sacar el agua de manera eficaz después de cada lluvia. También cree que parte del problema comenzaría a solucionarse, en el sector norte, con las obras del Plan de Protección Costera -programadas a iniciarse este 2019-: con la construcción de los espolones, se mitigaría la erosión y las inundaciones provocadas por el mar de leva, ya que las barreras actuales son insuficientes para controlar el nivel del mar en las calles.

Pero es la puesta en marcha de un Plan Maestro de Drenajes Pluviales la solución medular que le garantizaría a Cartagena la evacuación de sus aguas lluvias a través de tuberías pluviales y del sistema de caños.

Lograrlo requiere una billonaria inversión, avaluada en por lo menos 1,9 billones de pesos, según documentos publicados por la Alcaldía de Cartagena. Para sacar ese proyecto adelante, la ciudad necesita los espaldarazos de los ministerios de Hacienda y Vivienda, el visto bueno del Concejo Distrital y la financiación de la banca privada.

La Secretaría de Infraestructura dijo el año pasado que está en marcha un plan para la intervención de más de 150 canales en la ciudad, que empezaría con una primera fase de 26 canales. Su diseño está listo para que el Concejo lo estudie y lo apruebe. Sin embargo, la fecha real de ejecución del proyecto aún no está clara.

La secretaria de Infraestructura Clara Calderón reconoció que los trabajos para contrarrestar la falta de drenaje en la ciudad han sido modestos. "Son avances con las uñas", indicó. Por eso, mientras la solución no se vislumbre, las calles con agua lluvia estancada seguirán siendo parte de la rutina de ciudadanos como Elías.

**Historia desarrollada como parte de la clase Gestión de contenidos web 2018-II*

COPROPIETARIOS DE AQUARELA: más de dos años en el limbo

Los compradores del polémico proyecto de vivienda continúan a la espera del desenlace de los procesos judiciales que tienen paralizada la construcción. El capítulo más reciente lo protagonizó la Unesco, después de darle dos años de plazo a la ciudad para la demolición de la obra y no ver, así, comprometida su declaratoria de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.

Martín Carvajal *

Novecientas cuarenta y seis familias invirtieron en el proyecto de viviendas de interés social (VIS) Aquarela, ubicado en el barrio Torices. Ciento setenta y seis de ellas compraron un apartamento en la primera de las cinco torres previstas para el conjunto multifamiliar. El 30 de agosto de 2018, esas 176 familias debían recibir sus nuevas residencias.
A la fecha, siguen esperando: desde octubre de 2016, una serie de procesos judiciales paralizó la construcción de Aquarela por completo.

LLUVIA DE ACUSACIONES

Todo comenzó cuando el Ministerio de Cultura y la Unesco expresaron, entre 2017 y 2018, reparos por el proyecto ubicado a pocos metros del Castillo de San Felipe de Barajas, que junto con el Centro Histórico y las fortificaciones de Cartagena son Patrimonio de la Humanidad desde 1984.

Fotografía tomada de eluniversal.com.co

Fotografía tomada de Colombia.com

Especialmente, esas dos entidades expresaron sus reparos porque notas periodísticas han advertido, los últimos tres años, sobre la construcción de un helipuerto y la apropiación de espacio público por parte del constructor Promotora Calle 47 S.A.S. Además, la Procuraduría alegó que los constructores y la Curaduría Urbana al parecer incurrieron en prevaricato y urbanización irregular.

En medio de la madeja judicial, están las familias que invirtieron en el proyecto y cuyos testimonios han aparecido en algunas publicaciones locales: primero expresando en video sus críticas contra las decisiones judiciales que tienen paralizado el proyecto y, después, contando su insatisfacción por los pronunciamientos del Ministerio de Cultura.

En ese video los copropietarios se quejan, además, del cubrimiento mediático de la construcción; hablan de sus subsidios de vivienda próximos a vencer; exigen su derecho a la vivienda y expresan su preocupación por la incertidumbre en la que se encuentra el proyecto. En ocasiones, incluso hacen acusaciones de talante conspirativo.

LO QUE DICEN LOS COMPRADORES

Yamileth González Varón es una de las personas que invirtió en Aquarela y aclara que ella no participó en el citado video. Escuchó sobre el proyecto por primera vez en 2015, cuando apenas era un rumor. Luego, ese rumor comenzó a hacerse real, y ella vio la posibilidad de brindarle a su madre una residencia propia, después de que su progenitora Luz Marina Varón pasara años viviendo en alquiler.

No solo le parecía una buena inversión (el apartamento costaba 103.500.000 de pesos), sino que, además, podría visitar a su madre más seguido: Luz Marina vive en el barrio Los Alpes, Yamileth vive en Crespo. Tras realizar el debido proceso, madrugar y hacer fila durante el lanzamiento de la Torre 1, consiguió el apartamento 22F.

La mujer se inscribió en el proyecto a través del sitio web oficial, pidió créditos bancarios para pagar el inmueble y se dispuso a cumplir con cada una de las 22 cuotas que le exigía la constructora, la última de las cuales estaba planificada para el 5 de agosto de 2018. El 30 de ese mismo mes le entregaría el apartamento a su madre. O eso parecía.

Al igual que las otras 945 familias que participaban del proyecto, Yamileth recibió un correo a finales de octubre de 2016, en el que la constructora le anunciaba que el edificio estaba detenido a raíz de una acción popular entablada por el Ministerio de Cultura bajo concepto de afectación a un bien de interés cultural. Pronto se sumó una acción de nulidad de la Procuraduría con el mismo fin. El correo oficial de Aquarela le informó también, en noviembre de 2016, que no debía pagar más cuotas hasta que el proceso judicial se solucionara.

Aún hoy, cada vez que ocurre algún avance en materia jurídica, esa misma cuenta le manda un resumen de las audiencias. Para Yamileth, los encargados del Aquarela han dado la cara frente a sus compradores. "Siempre estuvieron muy prestos a responder", dice.

Como lo anuncian en el video, las familias se organizaron para ejercer presión a favor del proyecto y crearon el grupo Asociación de Copropietarios del edificio Aquarela (Asproaqua), muy activo en Whatsapp. Es a través de este medio y de los correos institucionales que los compradores se enteran de cómo avanzan los procesos. Especialmente porque entre los compradores hay abogados.

A los copropietarios el relativo silencio del Ministerio y la frecuencia con la que aplazan las audiencias del proyecto les genera desconfianza. Entre tanto, los medios les causan ruido e indignación. Yamileth, al igual que los compradores del video, tildan a los medios locales de "amarillistas" y de satanizar el proyecto.

A pesar de que resultó imposible contactar a otros copropietarios, los materiales compartidos por el grupo de Whatsapp retratan parte de sus dudas, en particular un audio de una reunión que tuvieron con los abogados de la constructora el 31 de julio de 2018.

Durante las casi dos horas registradas de grabación, Lucas Tamayo (en representación de la Promotora 47) y Felipe Pinilla (de la firma Pinilla-González-Prieto) atienden las inquietudes de los copropietarios una tras otra. Las preguntas de estos dejan ver que su mayor preocupación es lo que ocurrirá con sus inversiones, pues muchos de ellos tuvieron que pedir créditos y subsidios para poder pagar las cuotas de los apartamentos.

Tamayo les explicó a los compradores que las personas que invirtieron en las torres 1 y 2 (404 familias) no pueden exigir nada a la fiduciaria, puesto que su dinero ya se utilizó. Como prueba, cita lo que iba construido del conjunto: la primera torre, junto con los basamentos de la segunda. Por otro lado, los compradores de las torres 3, 4 y 5 sí pueden exigir su dinero de vuelta. De hecho, en caso de retirar su inversión y volver más tarde, tendrán prioridad al distribuir o renegociar los apartamentos.

Si bien los miembros de la promotora todavía ven el futuro del proyecto con optimismo y se mantienen firmes en sus alegatos y argumentos, no se puede decir lo mismo de todos los compradores, porque la dilación de un fallo y los últimos contratiempos que ha sufrido Aquarela les preocupan.

Esos reveses incluyen tres eventos: las declaraciones del procurador Fernando Carrillo, quien afirmó que Aquarela debe ser demolido; el rechazo del Mincultura a la nueva propuesta de la constructora sobre la reducción de pisos de las torres, y el proceso contra el arquitecto Claudio Restrepo, el representante legal Lucas Tamayo y el curador urbano de Cartagena Ronald Llamas, un año después de que un juez hubiera determinado dejarlos en libertad, pero continuara la investigación por la construcción del edificio.

Si el Ministerio y la Procuraduría ganaran los pleitos legales, entonces Promotora Calle 47 demandaría al Estado y los compradores podrían unirse a esta contienda. Sin embargo, solo aquellos que invirtieron en las torres 1 y 2 podrían iniciar una batalla legal, pues el dinero de los demás está con la fiduciaria.

Cuando a Yamileth le preguntan si lo ideal sería que el proyecto avance, ella responde: "Sí, definitivamente", y ese es el mismo sentimiento que se desprende del video publicado por los otros copropietarios y de la reunión con los abogados de la constructora.

Para muchos de los compradores, Aquarela es la opción de vivienda más accesible que tienen, particularmente por su costo y su privilegiada ubicación geográfica a pocos metros del Castillo San Felipe y muy cerca del Centro Histórico. Aunque sueñan con ver el proyecto concluido, son conscientes de que ese sueño puede esfumarse. De ser así, entrarán en una nueva espiral de trámites para pedirle cuentas al Estado.

**Historia desarrollada como parte de la clase de Gestión de Contenidos Web 2018-II*

EL NEGOCIO DEL HUMO *en las faldas de La Popa*

Las quemas ilegales en el cerro de La Popa se han convertido en una realidad insostenible para los habitantes de ese sector cartagenero, sobre todo para lo residentes de Lo Amador, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad.

*Sharon Mejía, Camila De la Ossa y Cindy Altamar **

Los vecinos y habitantes de ocho barrios asentados en las faldas de La Popa, en Cartagena, se encuentran sumergidos en un drama al que ellos mismos han denominado "la mafia del humo". Se trata de una seguidilla de quemas ilegales, parte de un lucrativo negocio informal que ha desencadenado un problema de salud pública en la zona y un miedo generalizado entre los residentes, quienes temen represalias en su contra por sus continuas denuncias.

Uno de los barrios más afectados es Lo Amador, en el que viven unas cuatro mil personas. En el sector, conocido por los cartageneros como el "barrio plateado por la luna", varios de sus habitantes se ahogan por la quema ilegal de caucho, electrodomésticos y cables, provocados con frecuencia por los recicladores para extraer cobre y venderlo a las chatarrerías cercanas.

En abril de 2018, la incineración de unas neveras generó tanto humo espeso que incluso hasta lo respiraron los residentes del barrio El Cabrero, situado a más de 2,6 kilómetros de Lo Amador.

Las quemas ponen en peligro la integridad física de quienes residen en las faldas del cerro en cuya cima está uno de los principales atractivos turísticos de Cartagena. Especialmente, porque el humo se produce cada dos o tres días en áreas ubicadas a menos de diez metros de viviendas en las que viven niños y ancianos.

Esa combustión de desechos y productos reciclados ha agudizado la de por sí ya frágil situación medioambiental de La Popa, una de las reservas naturales de Cartagena, pero amenazada desde hace más de cinco años por los recurrentes incendios. El fuego transforma las zonas verdes en lotes susceptibles a la venta o a la construcción de cambuches y viviendas, según han informado las mismas autoridades distritales que siguen sin solucionar el problema.

UN NEGOCIO DISCRETO, PERO LUCRATIVO

Detrás de las quemas hay una cadena productiva informal, sin suficientes controles ambientales, que pareciera no generar muchos recursos, pero que en realidad es un entramado de lucrativos eslabones que involucra a recicladores y chatarrerías locales. Aunque los afectados tienen claro quiénes son los responsables de los hechos, no se atreven a señalarlos con nombres propios.

Esta cadena comienza a funcionar con los recicladores que queman los materiales de los que saldrá el cobre. La subida a La Popa de esos elementos sin vida funcional, entre los que hay cables eléctricos, equipos electrónicos, electrodomésticos, neumáticos y productos de latón, demanda cuatro personas. Cada una de ellas recibe $5 mil. Después, solo dos se encargan de bajar el cobre generado por la quema. Por ese viaje cada una recibe otros $5 mil, lo que suma una inversión inicial de $30 mil por el transporte de la materia prima y su posterior transformación bajo fuego.

En una jornada pueden haber hasta tres quemas, por lo que si una persona se dedica a subir y bajar el material tendría al menos ingresos por $30 mil en un mismo día, una suma similar a la obtenida por un empleado de medio tiempo en cualquier establecimiento formal del país, y con los que un reciclador solventa parte de sus necesidades de techo y alimentación.

El lucro del negocio aparece en el siguiente eslabón, cuando las chatarrerías le compran a los recicladores el cobre, un metal que puede ser reciclado un número infinito de veces sin perder sus propiedades. Por eso, su compra y venta son consideradas parte de un negocio rentable en todo el mundo, cuyos principales compradores son China, Corea, Brasil y Grecia, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

En Cartagena, por ejemplo, las chatarrerías pagan por cada kilo de cobre $15.000, por cada kilo de bronce $11.200 y por cada kilo de aluminio $3.000. Esa diferencia de precios impulsa a los recicladores a buscar cobre en elementos de la vida cotidiana, generalmente entre la basura de los hogares y de algunas empresas; a quemar y a vender.

Es un negocio tan voluminoso que las grandes empresas chatarreras de la ciudad pueden comprar cada 2 ó 3 días hasta tres toneladas de material ferroso.

ALGO HUELE MAL Y A PELIGRO

En contraste con los réditos económicos están los padecimientos de los pobladores. Niños y ancianos con tos y lagrimeo son solo una pequeña cuota de la estela de afecciones que deja la inhalación del humo en las casas ubicadas en las faldas de La Popa.

Vivir en estas condiciones puede generar enfermedades severas como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc), una condición que tiene muchas complicaciones según el médico Gustavo Pardo Schotborgh, porque desencadena una obstrucción en la circulación del aire y recurrentes dificultades respiratorias.

Uno de los afectados es Carlos Javier Periñán, habitante del barrio Lo Amador. Como rebuscador informal, Carlos se dedica ocasionalmente a esta actividad, transportando los bultos llenos del material para las futuras quemas. Sin embargo, con el nacimiento de sus hijos, dice haber reflexionado sobre las graves consecuencias que esas actividades pueden traer para su familia y sus vecinos.

"Sinceramente, eso es una problemática que traemos desde hace rato, pero ahora se están viendo más las quemas de cobre. Con la lluvia no está soplando viento y nos está perjudicando más todavía, porque antes soplaba y agarraba el humo para arriba pero ahora el humo se concentra aquí abajo y por todo el barrio se riega, las plantas ya no quieren crecer. El humo, como quien dice, ha matado la arena", asegura Periñán.

SINCERAMENTE, LAS QUEMAS DE COBRE SON UNA PROBLEMÁTICA QUE TRAEMOS DESDE HACE RATO, PERO AHORA NOS ESTÁN PERJUDICANDO MÁS, PORQUE CON LA LLUVIA NO ESTÁ SOPLANDO VIENTO Y EL HUMO SE CONCENTRA AQUÍ ABAJO.

Otro afectado del barrio Lo Amador lamenta que las quemas hayan desplazado a algunos de sus vecinos, quienes desesperados prefirieron mudarse de barrio. Este ciudadano dio su testimonio con la condición de que se mantuviera su identidad bajo anonimato porque teme represalias de los recicladores.

Y su miedo aumenta porque, cansado de denunciar, no ve soluciones de fondo. En cambio, siente que cada vez más aumenta el riesgo de meterse en problemas porque, asegura, hay policías que le revelan a los dueños de las chatarrerías y a los recicladores los nombres de quienes reportan las quemas.

"Eso es un riesgo para mi seguridad -continúa el morador-. Hace unos días iba a grabar, y uno de mis vecinos me enfrentó diciendo que no podía, que ese negocio era de él y si se lo quitaban me las tenía que arreglar con él. Por esto ya me siento amenazado, porque me dijo que si a su hijo que era quien estaba quemando lo cogían preso me iba a meter en problemas".

UN PROBLEMA AMBIENTAL Y DE AUTORIDAD

Esos incendios suman el 20% de las emergencias forestales atendidas en Cartagena cada año por el Cuerpo de Bomberos, explica el teniente Aníbal Guerrero, miembro de esa institución. "Los casos son casi repetitivos", dice.

Hasta el segundo semestre de 2018, el Cuerpo de Bomberos había atendido unas 400 emergencias por incendios forestales, un tercio de ellas por quemas en sectores de las faldas de La Popa, como los barrios Nariño y Lo Amador.

Febrero fue el mes de 2018 con más incendios forestales en toda Cartagena, con un promedio de cuatro emergencias por día, dice el subintendente de la Policía Ambiental Edú Pacheco.

"Lo de la quema por parte de particulares para la extracción de fibras de cobre y demás metales sí es cierto, son personas que van, suben, hacen sus quemas sin importarles la basura que dejan en la zona. Se están tomando medidas con la Policía Metropolitana para que estén prestos a cualquier llamado e ir a investigar sea cual sea el caso que se presente en la comunidad", dice Pacheco.

Pese a las emergencias atendidas por los bomberos y al conocimiento que sobre el fenómeno tiene la Policía Ambiental, no es mucha la información que existe sobre sus responsables, reconoce Leonel Guardo, director encargado del Establecimiento Público Ambiental (EPA).

Para dar con los responsables debe haber una estrategia que involucre a bomberos, Policía Ambiental, EPA y la Fiscalía para que no solo reciban comparendos ambientales cuando sean sorprendidos quemando en La Popa sino que afronten una investigación penal por delitos ambientales, contemplados por las leyes colombianas. Además, ese trabajo interinstitucional es necesario para conocer quiénes realmente están detrás de los capturados.

También ha faltado autoridad en Cartagena para hacer respetar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que establece que las basuras y desechos deben ser llevados a espacios alejados del área urbana, y que las chatarrerías no pueden funcionar en zonas residenciales.

Sin embargo, hay tres chatarrerías funcionando en Lo Amador. Se encuentran entre las calles San Fernando, Las Flores y Santander, a pocos metros de las viviendas. Las dos primeras tienen aspecto de casa de familia, incluso habitadas por tres personas cada una. Los propietarios de estos locales alegan que se encuentran en una zona comercial, y que por lo tanto tienen derecho a operar allí.

Jeyler Medrano, presidente de la Junta de Acción comunal de Lo Amador, sostiene que este argumento es falso.

"Nosotros no nos oponemos a que ellos operen y abran su negocio, pero si eso está siendo un foco de contaminación y está sirviendo de imán para terceros que en vez de respetar a los vecinos lo que hacen es amenazar, entonces es normal que pidamos una investigación seria por parte de las autoridades competentes", dice el líder comunal.

Medrano relata que el proceso no ha sido fácil y que muchas veces se ha visto luchando sin apoyo, pues aunque es su deber como Presidente de la JAC denunciar las irregularidades en su barrio no quiere tomar decisiones en las que no cuente con el respaldo de sus vecinos, quienes cansados de llamar a emergencias ven como opción más segura callar y soportar.

Tanto Medrano como muchos de los residentes en Lo Amador se preguntan por qué estos locales operan con normalidad, por qué están ubicados en una zona residencial y por qué la Policía Metropolitana al llegar a atender las quemas se retira sin poner en cintura a los infractores. Quizá parte de las respuestas estén en el desorden administrativo y en la crisis social en los que desde hace una década está sumida Cartagena: la capital de Bolívar a tenido al menos 11 mandatarios entre elegidos popularmente y designados por el Gobierno central.

Mientras tanto, los habitantes del barrio 'plateado por la luna' no dejan de preguntarse hasta dónde tendrá que llegar el rastro del humo para que las llamas dejen de amenazarlos y se detenga este atentado ambiental contra uno de los pulmones más significativos de Cartagena.

Vea la versión multimedia de esta historia en http://quemas-enlapopa.blogspot.com/

**Historia desarrollada como parte de las clases de Gestión de Contenidos Web y Periodismo en el Caribe colombiano 2018-I*

LA metamorfosis DE GETSEMANÍ

La transformación de uno de los barrios más icónicos de Cartagena se da en medio de voces a favor y en contra de una revolución urbanística, que cada vez más atrae a turistas nacionales y extranjeros, pero al mismo tiempo desplaza a los propios cartageneros.

*Yordi Alcalá**

Ramiro Morelo nació y creció en el barrio Getsemaní. Allí, entre casitas de colores, vió correr su infancia y entre callejones estrechos vivió de manera clandestina los agitados amores de la adolescencia. Durante más de 50 años Morelo compartió con sus amigos y vecinos, a quienes como piezas de un sistema los conectaba el orgullo de hacer parte de uno de los últimos reductos de la cultura autóctona del casco que compone el Centro Histórico de Cartagena de Indias: el pintoresco barrio de Getsemaní, enclave patrimonial de la ciudad.

Sin embargo, en los últimos años a Ramiro le cuesta identificar a la mayor parte de sus vecinos. Hoy en día muchos rostros no le son familiares e incluso la casa en la que vivió un día le resulta diferente, ajena, e incluso irreconocible.

¿ESTÁ RAMIRO SUFRIENDO DE UNA ENFERMEDAD DE LA MEMORIA Y, AHORA, ESTÁ OLVIDANDO LA CIUDAD DE LA QUE HIZO PARTE UN DÍA? O ACASO, ¿ES LA CIUDAD LA QUE SE OLVIDÓ DE ÉL?

Resulta que desde la llegada del nuevo milenio, Getsemaní que tiempo atrás había sido considerada una zona de arrabales debido a su posición periférica al Centro Histórico, pasó a convertirse en un foco para los inversionistas, que desde la subcultural bohemia quieren vender al barrio como un punto de interés para los turistas que visitan la ciudad. Esto ha llevado a que el suburbio se haya llenado de hoteles, hostales, restaurantes, cafés, bares y discotecas que caricaturizan la cultura Caribe.

¿QUÉ TIENE QUE VER ESA METAMORFOSIS CON RAMIRO?

Pues, este fenómeno, llamado "gentrificación", se caracteriza por ocurrir en zonas de valor histórico y patrimonial como Getsemaní. Además, de manera paulatina se prolonga un proceso de sustitución de la población autóctona que por lo general es de bajos recursos económicos, como Ramiro, por una de mayores ingresos que tienen la capacidad económica de conservar y restaurar los inmuebles que poseen valor histórico.

¿Y CÚAL ES EL PROBLEMA CON ESE FENÓMENO?

Que muchos de los raizales son incapaces de adaptarse al nuevo costo de vida que los hoteles, restaurantes y bares imponen en el barrio ahora gentrificado. Entre más presencia haya de hoteles, por ejemplo, más costosos serán los servicios básicos como el agua y la electricidad de la zona, pues, el área deja de ser considerada como residencial y pasa a ser comercial. Incluso el estrato socioeconómico pasa a subir de nivel por la alta presencia de extranjeros que empiezan a habitar la zona.

Por eso muchos de los getsemanisenses terminan cediendo ante las jugosas ofertas de los compradores y venden sus viviendas. Ese hecho ha llevado a un descenso dramático en el número de habitantes raizales en Getsemaní la última década. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en 2005 Getsemaní contaba con 5.306 habitantes autóctonos, mientras que en 2012 solo habían 848 habitantes de origen raizal, es decir, 82% menos.

Eso explica por qué Ramiro ya no reconoce a la mayor parte de sus vecinos. Por el contrario, las caras que ahora ve pertenecen a extranjeros que llegan al barrio de paso, que solo se quedan en un hotel o un hostal por unos días, ocupan el espacio público colmando las plazas y dejan a su paso una estela de basuras que a los raizales como comunidad les toca recoger.

"Nosotros aquí en la comunidad somos los encargados de limpiar y restaurar nuestras plazas y nuestros parques. Porque si nosotros no lo hacemos nadie más lo hará. Aquí no llega nadie de la Alcaldía, ni el IPCC, ni siquiera los de los hoteles que se aprovechan de nuestras calles, pero no son capaces de poner entre todos para pintar la plaza. Eso nos toca a nosotros, porque queremos demostrar que esto es nuestro y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy".

Ramiro asegura que no está en contra de la llegada de extranjeros a su barrio, es más dice estar a favor del turismo en Getsemaní. Sin embargo, piensa que las actividades turísticas deberían incluir a la comunidad autóctona del barrio. Propone un turismo sostenible en el que todos los actores involucrados trabajen para lograr un verdadero desarrollo del barrio, pues es la historia de este lo que los une.

"Aquí si los hoteles, restaurantes y demás negocios se acercaran a la comunidad y nos dieran también a nosotros oportunidades de empleo digno, si se tomase al getsemanisense como un ser de trabajo y que tiene mucho que aportar al desarrollo cultural, nosotros los aceptaríamos como parte de nuestra comunidad. Pero nada de eso sucede, aquí atropellan al raizal y lo sacan de su propio ambiente. Lo excluyen cuando nosotros podríamos aportar con nuestras historias, con el conocimiento que tenemos de nuestra propia cultura".

Así pues, Ramiro y varios otros habitantes se oponen a abandonar su territorio. Se han llamado así mismos "la resistencia" y están promoviendo entre sus jóvenes el sentido de pertenencia por su cultura a través de proyectos como "La Muralla Somos Todos", que consiste en visitar los colegios de la zona y hablarles a los jóvenes sobre sus raíces.

A pesar de todo Ramiro Morelo mira con desdén un futuro que amenaza con acabar los últimos rastros que aún quedan de aquella comunidad.

"Lo que veo es que aquí seguirán sacando a la gente. En Getsemaní aparece un hotel nuevo cada 20 días y nuestros esfuerzos resultan insuficientes para mantenernos", dice Ramiro mientras ve cómo los turistas pisan la pintura recién echada.

**Actividad desarrollada como parte de la clase de Periodismo de Datos 2018-II*

LA LUCHA POR EL TERRITORIO en La Boquilla

Un fallo judicial tiene enfrentados a dos grupos ciudadanos por la zona más pobre del norte de Cartagena. Una situación que evidencia los desafíos de la ciudad en la conservación de sus áreas naturales y, al mismo tiempo, en garantizarles los derechos a sus habitantes más vulnerables.

*Yeimy Bula y Angie Peláez**

El Tribunal Administrativo de Bolívar le ordenó en 2017 a la Alcaldía de Cartagena reubicar a 2.303 personas que viven en zonas de alto riesgo en el corregimiento de La Boquilla, en el norte de la ciudad. Esa decisión judicial agudizó una lucha por el territorio que se libra allí desde la década de los 90. Especialmente, en las veredas Marlinda y Villa Gloria.

La reubicación debe darse bajo cuatro condiciones:

1. Las nuevas viviendas deben ser construidas en un predio ubicado a no más de dos kilómetros del litoral costero.
2. Las familias deben ser reubicadas donde puedan seguir haciendo sus prácticas tradicionales.
3. Las viviendas deben estar dotadas de todos los servicios públicos domiciliarios.
4. La comunidad debe vivir en viviendas dignas.

Aunque el Tribunal ordenó que la reubicación debía hacerse antes de 2021, a menos de dos años de cumplirse el plazo, la Administración Distrital no ha presentado ningún proyecto ante el Concejo. Mientras tanto, hay una comunidad en riesgo porque una parte de sus habitantes vive sobre rellenos de escombros, y se impacta ambientalmente una zona de reserva que conecta al mar Caribe con la Ciénaga de la Virgen.

La historia judicial por este territorio comenzó a escribirse hace siete años cuando los ambientalistas Rafael Vergara y David Sandoval interpusieron una acción popular con la que buscaban proteger los derechos colectivos del medio ambiente, la seguridad y la defensa de los bienes de uso público. Sin embargo, esa acción terminó desatando la resistencia de los lugareños, que no quieren que el Distrito los reubique porque consideran ese sector su hogar.

Estos son los rostros que luchan, desde orillas distintas, por el territorio de La Boquilla

LAS BATALLAS DE GLORIA

Gloria Sánchez, representante legal del Consejo Comunitario de la vereda Villa Gloria, comenzó su lucha por ese territorio en 1993. Ese año hizo parte del grupo de habitantes que protagonizó una primera toma de tierras, que terminó con un desalojo masivo. Tres años después, las familias intentaron una nueva toma masiva, se instalaron y lograron abarcar más territorio. Desde entonces están allí.

"No fue nada fácil. A los tres días llegó la Policía, el Ejército. Llegó todo el mundo. Fueron 20 intentos de desalojo bien fuertes. Nosotros con una cantidad de heridos, mujeres pariendo en medio de la lucha. Que estemos en este territorio, treinta y pico años después, significa que valió la pena", dice Gloria.

Por su lucha, incluso, ha estado tras las rejas. En 2002 estuvo presa durante 62 días en la cárcel de San Diego, en el Centro, por un proceso ambiental. Lejos de debilitarla, esos dos meses privada de la libertad fortalecieron su liderazgo.

Tan pronto salió siguió a la cabeza del proceso de organización del territorio: ella y sus vecinos construyeron las humildes viviendas en madera en la que muchos todavía viven, mientras otros las han reemplazado por modestas construcciones de cemento.

Gloria dice con ahínco que no saldrá de La Boquilla para irse a otro sector cartagenero.

"Nosotros estamos con 80 ojos porque a lo mejor los políticos se están imaginando que a Gloria Sánchez la van a meter en una cajita de fósforo, yo me muero al día siguiente, me muero, te lo aseguro, porque yo no estoy acostumbrada eso", dice al referirse a las casas de interés social a las que los colombianos con pocos recursos suelen mudarse, subsidiados por el Gobierno nacional.

EL DOBLE DESPLAZAMIENTO DE ELIÉCER

Hace 25 años, el conflicto armado obligó a Eliécer Barón a abandonar su Necoclí natal, en Antioquia. Paramilitares le arrebataron la finca de su padre y lo dejaron en la ruina. Desplazado, llegó a La Boquilla para la misma época en que comenzaban a asentarse en ese sector cartagenero familias que también huían de la violencia de otros rincones de Colombia, como Córdoba, Sucre y Chocó.

Esas familias lentamente fueron poblando parte del territorio que hasta ese momento estaba en reserva y hoy se conoce con los nombres de Marlinda y Villa Gloria. Además, se organizaron en la asociación de desplazados Asoboquilla.

"Dicen que nosotros somos depredadores de mangle, pero no estamos depredando mangle (...) Lo que pasó en Mamonal no tiene precio, lo que está pasando aquí en Las Américas, eso no lo están mirando", sostiene Eliécer al hacer alusión a los procesos de urbanización de dos sectores cartageneros que se han dado en medio de alertas por su impacto ambiental y han desencadenado protestas, como una de 2015, cuando 150 pescadores de la Isla de Tierrabomba y del sector Albornoz rechazaron la tala de mangle y la contaminación que generan los desechos industriales de Mamonal en la Bahía de Cartagena.

"DICEN QUE NOSOTROS SOMOS DEPREDADORES DE MANGLE, PERO NO ESTAMOS DEPREDANDO MANGLE (...) LO QUE PASÓ EN MAMONAL NO TIENE PRECIO, LO QUE ESTÁ PASANDO AQUÍ EN LAS AMÉRICAS, ESO NO LO ESTÁN MIRANDO."

Como ya lleva casi tres décadas de vida en La Boquilla, Eliécer considera que si se cumple el fallo del Tribunal se convertiría otra vez en desplazado. Esta vez, por orden judicial.

EL AMBIENTALISTA QUE SACRIFICA SU VIDA POR LOS MANGLARES

Rafael Vergara, abogado, ambientalista y comunicador, afirma que la defensa del medio ambiente de Cartagena es su proyecto de vida. Por eso, presenta acciones populares y demandas, dicta conferencias y escribe columnas para denunciar los atropellos ambientales de su ciudad.

"Usted no se imagina lo que es llegar, por ejemplo, a la audiencia de conciliación, cuando inició el proceso (de La Boquilla), y entrar por la mitad de una comunidad diciéndonos de cuanta cosa. Ese es el riesgo que tengo que correr".

"Usted no se imagina lo que es llegar, por ejemplo, a la audiencia de conciliación, cuando inició el proceso (de La Boquilla), y entrar por la mitad de una comunidad diciéndonos de cuanta cosa. Ese es el riesgo que tengo que correr"

Tras la indignación que generó en la comunidad el fallo del Tribunal, Rafael Vergara asegura haber recibido amenazas de algunos habitantes de la vereda de Marlinda. Por eso prefiere no regresar a ese sector hasta que los ánimos se calmen. "Me han dicho que me van a picar en pedacitos", cuenta. Pese a esas amenazas, hasta ahora Vergara no ha interpuesto ninguna denuncia ante la Fiscalía.

Con la acción popular, Vergara dice que él y su compañero de lucha David Sandoval buscan que esas familias vivan en mejores condiciones y sin impactar ambientalmente una zona de reserva natural de la ciudad.

Sin embargo, es consciente que esa reubicación está lejana, tal como la ordenó el Tribunal Administrativo de Bolívar. Especialmente, porque la ciudad está sumida en una crisis administrativa que tiene empantanadas sus inversiones millonarias, que quizá despeguen cuando llegue un alcalde titular, elegido por los cartageneros en las urnas y no designado en encargo desde Bogotá.

Mientras eso pasa, la reubicación de las familias y la reconstrucción ambiental de La Boquilla se suman a los desafíos mayúsculos de Cartagena, especialmente porque la ciudad debe conservar una de sus áreas naturales, pero sin vulnerarle los derechos a sus habitantes.

**Historia desarrollada como parte de la clase de Gestión de Contenidos Web 2018-I*

Vivir del Mercado de Bazurto

Las percepciones sobre uno de lo sitios más reconocidos de Cartagena son variopintas: para algunos es sinónimo de contaminación y miseria; para otros es el centro comercial y cultural más grande de la ciudad, del que viven cientos de familias cartageneras.

María Alejandra Romero Solano*

Llegar a Bazurto es encontrarse con una de las diversas caras de Cartagena, totalmente opuesta a la que retratan las postales turísticas. Luego de pasar el semáforo en la entrada de la antigua loma de Bazurto, o de entrar por el sector de Las Delicias en la Avenida Pedro de Heredia, percibo el cambio de ambiente.

La zona de concentración comercial más grande de Cartagena me da la bienvenida: caos vehicular; masas de gente transitando por todos lados; un 'salpicón' musical que incluye desde champeta hasta música cristiana; y lo más evidente, las distintas formas, olores, colores y sabores del comercio: desde los grandes almacenes de ropa, pasando por los pequeños puestos de pescado, hasta las carretillas distribuidoras de frutas y verduras.

En el corazón de la zona, me encuentro con el Mercado de Bazurto, la principal central de abastos de la ciudad.

Quien se adentra en el mercado, sobre todo si lo hace por primera vez, puede creer que los sentidos no le funcionan lo suficientemente bien. Le costará mimetizarse y captar cada detalle, como en visión panorámica de 360 grados. La vista no logrará detallar todos y cada uno de los objetos, colores, lugares y gente alrededor –verá la venta de ropa, la droguería, las cabezas de los cerdos, la gente en movimiento, el pescado y la carne. También al yerbatero y al carretillero–; el olfato no conseguirá distinguir un olor en específico dentro del popurrí –¿Será que huele a pescado, a sopa o a yerbabuena?–; y los oídos milagrosamente llegarán a distinguir la canción que suena en ese específico espacio: puede sonar en la droguería la emisora Minuto de Dios y a pocos pasos, en la tienda de pájaros, un equipo a todo timbal, con un señor cantando y bailando champeta.

La vista, los olores y la música e incluso los sabores (porque el mercado también es clave dentro de la gastronomía cartagenera) son tan dinámicos como el mercado mismo. Lo que sí va a ser una constante dentro del mercado es la gente trabajando en sus locales y otros tanto transitando por los pasajes de este laberinto urbano con una carretilla, un carrito de mercado o con un bulto de papa sobre el hombro. Buscan el sustento del día para alimentar a su familia.

1 En el mercado hay aproximadamente 35 mil plazas de trabajo, de las cuales 22 mil son empleos directos, 10 mil indirectos y tres mil trabajos informales.

2 De las 35 mil personas que viven del mercado, la mayoría suele levantarse en la madrugada para salir temprano y llegar antes de las 5 de la mañana.

3 Estas 35 mil personas mueven gran parte de la economía cartagenera.

Un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Bolívar y el *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) en 2010 señala que el mercado, además de ser el principal proveedor de alimentos de la ciudad, es una importante fuente de trabajo para la población cartagenera. En el mercado hay aproximadamente 35 mil plazas de trabajo, de las cuales 22 mil son empleos directos, 10 mil indirectos y tres mil trabajos informales.

De las 35 mil personas que viven del mercado, la mayoría suele levantarse en la madrugada para salir temprano y llegar antes de las 5 de la mañana a Bazurto (hora en que comienzan las actividades allí), para luego trabajar arduamente todo el día y abastecer hogares, hoteles o empresas. Al final de la jornada, la mayoría regresa a sus casas con el sustento del día. Estas 35 mil personas mueven gran parte de la economía cartagenera, y cada uno de esos sujetos tiene una historia y una versión de lo que para ellos significa vivir del mercado.

* * *

Miércoles, 8 de mayo de 2019, 8:30 de la mañana.

Para este miércoles la Alcaldía Distrital ha programado una jornada de limpieza, desde las 2:00 de la tarde hasta la medianoche del jueves. El mercado cerrará temprano y a cada trabajador le tocará afanarse e intentar vender suficiente mercancía para mitigar las horas de cierre.

'El Mello', un hombre delgado, con aspecto cansado por tener a cuestas años de arduo trabajo, pero dispuesto a colaborarme y responderme algunas preguntas, es uno de esos 3 mil trabajadores informales de Bazurto. Él es uno de los personajes del lugar, conocido por su labor de carretillero. Una persona que deambula por el mercado en busca de alguien que necesite transportar sus compras.

'El Mello' me dice que lleva trabajando 18 años en el mercado. Bazurto lo ha ayudado a mantener económicamente a su familia todo ese tiempo. Su carrito, 'Mello 04618', lo acompaña desde que llega a las 5 de la mañana procedente de El Nazareno, barrio a más de media hora de distancia en bus.

Esta mañana transita las calles del mercado a toda prisa, mientras busca a un potencial cliente. Al ser un trabajador informal, no tiene un sueldo fijo, así que lo poco que gana cada día transportando compras, es lo que puede llevar a su casa.

Ya son las 9, y al otro lado del mercado, en la Avenida del Lago (sector mayoritariamente destinado a la comercialización de pescados y frutas), veo a dos señores apurados en un pequeño puesto de venta de mariscos. Charlan con otros dos hombres mientras pelan caracoles y langostas. Antes de las 11 de la mañana deben tener listo un pedido.

Comienzo a interrogarlos sobre su día a día. Les pregunto si pescan ellos mismos los mariscos y sobre su horario de venta. En medio de la conversación, que no es muy fluida porque el afán no les permite soltar la lengua, surge una respuesta inesperada.

–*¿Y quiénes son sus mayores compradores?* ¿Viene la gente del común a comprar sus langostas-, le pregunto a uno de los señores mientras miro cómo pela una langosta.

–*Esto no es comida para pobres, aquí vienen son los restaurantes prestigiosos a comprar abastos para cocinar sus platos caros*–, me responde indiferente uno de los hombres que conversaba inicialmente con los dos vendedores presurosos.

Ese comentario del señor me hace reflexionar sobre las contradicciones que convergen en el mercado. Los hoteles y restaurantes prestigiosos de la ciudad compran allí los mariscos con los que le darán de comer a unos comensales, que podrían desmayarse por el olor de Bazurto. Para esos comensales, quizá, el mercado podría ser solamente sinónimo de contaminación, inseguridad y pobreza.

Fotografía tomada de Zocozorongo

Fotografía tomada de Raspberry Kitsch

***

Yuri es otra vendedora de mariscos. Lleva 40 años vendiendo pescado. No está muy contenta debido a la limpieza del mercado. Según ella, esa limpieza no resulta útil: "No limpian nada. Solo mueven la basura que está aquí y la ponen allá, y el afectado es uno porque pierde día y medio de trabajo", me dice molesta.

Yuri llega todos los días a las 6 de la mañana y se va a las 2 de la tarde. Mientras se queja, atiende a un cliente, un hombre de la tercera edad llamado Víctor. Ese hombre va cada mes al puesto de Yuri para abastecer de pescado la nevera de su casa. Esta mañana le compra a Yuri todos los pescados que le faltan por vender. Mientras Yuri los limpia, va hablando con su cliente fiel del inminente cierre. Acaba contenta por haberlo vendido todo, pero recalca su molestia:que el mercado cierre a las 11 de la mañana es plata perdida.

Locales adentro, en el corazón del mercado, se encuentra 'El Runner', ícono de la cultura champetúa, por sus famosos carteles que hacen publicidad a eventos de *pickups* de champeta y salsa. Sus carteles llenan la ciudad. Ahora no sólo están pegados en los postes de luz o paredes de las calles anunciando un evento del Rey de Rocha, también anuncian eventos de cumpleaños o reuniones sociales.

En Bazurto, los colores neón representativos de los carteles resaltan por encima de todo. Ese día, 'El Runner', como los demás trabajadores del mercado, se encuentra ajetreado terminando un cartel para una fiesta de cumpleaños. "Se armó el fosforro en el cumpleaños de Cristy y su volumen 14", dice el cartel que diseña. El reconocido dibujante lleva 27 años trabajando en Bazurto el arte de los carteles, una tradición que también aprendieron sus hijos.

Fotografía tomada de Zocozorongo

Su "oficina", un sector del mercado lleno de diseños, color y una gran mesa que tiene pintado un cartel que dice "Runneristas", ha sido más que un lugar de trabajo.

"Me gozo este trabajo, me gozo estar en Bazurto. La gente no debe tener miedo de venir acá, si aquí lo que hay es cultura", me cuenta mientras le echa más color a los carteles por el cumpleaños de Cristy.

Como su experiencia con el mercado ha sido grata, El 'Runner' ha hecho todo lo posible para que el resto de la población cartagenera se enamore de Bazurto. Por eso es uno de los patrocinadores del 'Zocozorongo', una fiesta de champeta que busca la reivindicación del mercado como icono cultural. La actividad, organizada por un colectivo cultural, se realiza un domingo de cada mes en el sector donde este artista trabaja junto a sus hijos. 'El Runner' resume la iniciativa en una frase: "Vivo del mercado de Bazurto, debo hacer algo por todo lo que ha hecho por mí".

***

A diferencia de El 'Mello', Ruby y 'El Runner', hay otros a quienes no les gusta su lugar de trabajo, pero acuden a diario a Bazurto porque no tienen más opción. Ese es el caso de Dora Vásquez, dueña de una pequeña refresquería.

Dora es de Antioquia, llegó a los 15 años a conocer a Cartagena con ojos de turista y quedó enamorada de la ciudad, por lo que se quedó a vivir en ella. Más tarde tuvo una familia. Cuando su hijo creció y se fue al interior a estudiar, le dejó unas máquinas de azar tragamonedas. El joven se las dejó a su mamá para que hiciera con ellas lo que quisiera. Dora decidió utilizar el pequeño local que tiene el papá de su hijo en el mercado (la actual refresquería) para poner a trabajar las máquinas, y así darle un sustento a su familia, ya que es madre cabeza de hogar.

Con el tiempo, las máquinas le trajeron más de un problema: la gente se peleaba mientras jugaba y, por ser una mujer, más de uno intentó pasarse de listo con ella. Por eso decidió quitar las máquinas y quedarse solamente con la refresquería.

Cada día Dora le reza a Dios para que "la saque del mercado". Me dice que en el mercado no hay seguridad, que le han intentado robar varias veces y que una vez casi le intentan pegar. Se siente insegura y no quiere trabajar más ahí, pero no ha encontrado cómo dejar Bazurto atrás. Para ella ese sitio no es más que el lugar al que está obligada a ir a diario para mantener a flote su hogar.

Más allá de cada una de estas visiones, distintas entre sí y condicionadas por la historia de vida de cada trabajador, hay un factor común en Bazurto: la falta de atención de las autoridades a las problemáticas salubres, sociales, estructurales y de seguridad. Esa desatención ha acrecentado la visión negativa de los ciudadanos hacia el mercado. En especial, porque los intereses distritales van en contravía de las necesidades de los trabajadores y de los ciudadanos: desde hace años los distintos alcaldes anuncian, en vano, diseños para el traslado del mercado y la construcción de la Central de Abastos, pero ninguno da fechas concretas ni logra asegurar los recursos.

Es por esto que resulta de vital importancia que sea la ciudadanía cartagenera la que tome las riendas en la reivindicación del Mercado de Bazurto. Solo al exponer el potencial de Bazurto al resto de cartageneros que aún piensan en ese sitio únicamente como un lugar "contaminado y peligroso" y no como uno de los ejes de la economía y cultura cartageneras, cambiará la visión negativa de este emblemático sitio.

**Actividad desarrollada como parte de la clase de Periodismo: Noticia y Entrevista 2019-I*

El rebusque de un venezolano en Cartagena

Irwin es uno de los cientos de venezolanos que no paran de llegar en masa a Colombia desde 2013, cuando la situaciòn política de Venezuela comenzó a agudizarse con el ascenso al poder de Nicolás Maduro. Su historia es el rostro de una crisis humanitaria de dimensiones incalculables.

*Laura Montaña y Andrea Sotomayor**

Irwin Coronado es uno de esos inmigrantes venezolanos que, angustiado por sus problemas económicos, dejó hace dos años a su esposa, un hijo de 6 años de edad y al resto de su familia en su natal Villa de Cura, en el Estado Aragua, en Venezuela, para buscar un mejor futuro en Colombia.

Él es uno más de los 200 mil venezolanos indocumentados en Colombia, que hasta mayo de 2018 se habían registrado en el censo de Migración Colombia con el que las autoridades colombianas buscan determinar cuántos venezolanos hay en este país.

Irwin, además, es uno de los miles de ciudadanos que alimentan la informalidad laboral en Cartagena, un fenómeno que hasta hace pocos meses tenía exclusivamente como protagonistas a familias cartageneras y de otras regiones colombianas.

Sin embargo, desde que la crisis económica en Venezuela se agudizó, una ola de migrantes venezolanos que quieren dejar atrás las necesidades económicas de ese país ha llegado a Colombia a sumarse al "ejército de rebuscadores callejeros" nacionales. Esa realidad, en parte, se explica por la alta tasa de desempleo que, según indicadores del Dane, fue de 8,6 % en marzo de 2018 en Cartagena.

En los principales semáforos y sitios turísticos de Cartagena se volvió común ver a familias venezolanas pidiendo cualquier ayuda para comer.

El auge de la informalidad en Colombia se hace más evidente en sus calles y andenes, y en Cartagena en las calles del Centro Histórico, en el Mercado de Bazurto, en el barrio La Castellana y en los diferentes semáforos de la ciudad. Allí hombres y mujeres compiten por monedas realizando numerosas actividades, como malabares, o vendiendo diferentes productos como mentas, pañitos húmedos, chicles, manillas o agua.

A esos rebuscadores venezolanos se suma la mano de obra de ese país que está contratada en Colombia e ingresó legalmente. Un reciente estudio realizado por la Federación Nacional de Comerciantes –Fenalco- en Bolívar indica que un 70% de empresarios encuestados dijeron, este año, haber vinculado, por lo menos, a un trabajador de ese país en el último trimestre.

Más allá de las condiciones migratorias, detrás de cada uno de esos ciudadanos hay una tragedia humana. Especialmente, la sufren quienes tuvieron que dejarlo todo en su natal Venezuela para ingresar como ciudadanos en condición de ilegalidad a Colombia y encontrar en la informalidad laboral su sustento económico diario.

En Cartagena, la mayoría de vendedores informales se concentran en el Centro, el Mercado de Bazurto, el barrio La Castellana y en la Terminal de Transportes.

LA TRAVESÍA DE IRWIN

Este venezolano de 30 años de edad con buen porte y buen vestir, estudiaba contaduría pública en Villa de Cura, en el Estado Aragua. Era un pequeño empresario que atendía su propio lavadero de automóviles en Venezuela y comenzó a ser testigo de la agonía de su negocio por cuenta de la crisis.

Se sumó a los miles de ciudadanos que desde mediados del 2013 comenzaron a ocupar las plazas y calles venezolanas para protestar contra el régimen del presidente Nicolás Maduro; en una de esas manifestaciones fue capturado por la Policía y enviado a la cárcel por varios días. Tras su liberación decidió buscar el bienestar de los suyos, cruzando la frontera colombiana.

En Colombia la suerte no le ha sonreído como esperaba. Han transcurrido dos años desde que llegó, durante los cuales ha recorrido varias ciudades desempeñando diferentes oficios, ninguno acorde con su formación académica en Contaduría Pública, carrera que no puedo terminar y tuvo que suspenderla cuando solamente le faltaban dos meses para graduarse.

La tasa de desempleo, según el Dane, fue de 8,6 % en marzo de 2018 en Cartagena.

Tan pronto cruzó la frontera colombiana, el primer lugar donde empezó a laborar sin permiso de trabajo fue en Cúcuta. Ahí vendía caramelos en los buses y semáforos, pero al notar que no era rentable trabajar y vivir en ese lugar se fue en búsqueda de otro sitio para encontrar su estabilidad económica. Se trasladó hacia Barranquilla donde también vendía los mismos productos.

Esa informalidad continuó hasta Cartagena, ciudad a la que llegó a comienzos de 2017. Desde entonces trabaja como limpia-vidrios de carros, un oficio que en medio de las dificultades económicas le ha permitido pagar sus gastos en Colombia y enviar remesas a su familia en Venezuela.

EL LIMPIA VIDRIOS

A diferencia de quienes se dedican a esa actividad en los semáforos, Irwin impuso un estilo propio. Se instaló en el sector Puerto Duro, frente al monumento a la India Catalina, y acaparó la atención de muchos conductores y peatones por su presencia física: un código de vestuario poco usual entre quienes ejercen ese oficio. Luce como si trabajara en una de las oficinas ejecutivas del Centro amurallado. Suele vestir pantalón clásico, camisa manga larga, corbata, lentes rectangulares y una gorra alusiva a su país para protegerse del inclemente sol. Asegura que con esa forma de vestir les genera mayor confianza y seguridad a sus clientes.

Irwin lamenta no haber recibido de todos los colombianos el buen trato que esperaba, aunque reconoce que con las contribuciones que obtiene limpiando vidrios ha podido salir adelante. De hecho, ha rechazado varias ofertas de trabajo formal como mesero, porque le generaría menores ingresos.

De cada 10 carros que se detienen en el semáforo, tres conductores dejan que le limpie los vidrios y, cada uno, le paga entre 500 y mil pesos.

El sol canicular cartagenero comienza a marcarle la piel a Irwin. Pese a la incertidumbre que siente por su futuro económico y el devenir de su país, no se muestra derrotado: habla con seguridad, cuenta su historia a quienes se la preguntan y dice que hará lo necesario para sacar a su familia de la crisis venezolana y ofrecerle mejores condiciones de vida. No le importa que para hacerlo tenga que seguir limpiando vidrios de carros en Puerto Duro y haciendo parte de la informalidad local. Esa misma a la que también acuden muchos cartageneros para sortear su miseria.

**Historia desarrollada como parte de la clase de Gestión de Contenidos Web 2018-I*

EL CRIMEN EN CARTAGENA NO ES CULPA DEL VENEZOLANO

Los cartageneros creen que con la llegada masiva de extranjeros a su ciudad se han deteriorado los indicadores de seguridad en sus barrios. Sin embargo, las cifras oficiales dejan sin asidero esa creencia que, en cambio, evidencia xenofobia.

*Duván Álvarez y Daniela Ortiz**

Contrario al mito que ha hecho carrera entre los cartageneros, datos de la Policía Metropolitana de Cartagena revelan que los inmigrantes venezolanos no representan una amenaza mayúscula para la seguridad de la ciudad. La incidencia en la criminalidad de los nacidos en el país vecino es de menos del 1%, según los capturados los últimos tres años por homicidios, atracos, riñas y violencia intrafamiliar.

Desde 2013, año en el que Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela, una nueva oleada de ciudadanos de ese país comenzó a emigrar al resto de naciones suramericanas, un flujo migratorio sin precedentes que aún no cesa. Esto, con el fin de encontrar la libertad y el bienestar perdidos en una Venezuela que para entonces ya daba señales de su actual crisis.

Cartagena, como uno de los principales centros económicos de Colombia, es una de las 10 ciudades que más concentra población venezolana, con casi 64 mil migrantes, según un estudio del Observatorio del Delito de la Policía, publicado en octubre de 2018. Sin embargo, La Heroica tiene mucha menos población venezolana que Cúcuta, Barranquilla, Bogotá y Maicao.

Esa población migrante se ha integrado al país comportándose como el grueso de los colombianos, según un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), publicado en enero de este año. Allí se muestra que "las condiciones de seguridad" en Colombia "no se han visto afectadas por los migrantes venezolanos".

El mismo estudio evidencia que aunque las capturas de venezolanos van en aumento por "delitos contra el patrimonio, la seguridad pública y la integridad personal", estas no representan más del 1% de todas las capturas en el país. Además, esa población solamente representa el 4% del delito por el que más se le captura, que son los hurtos en establecimientos comerciales.

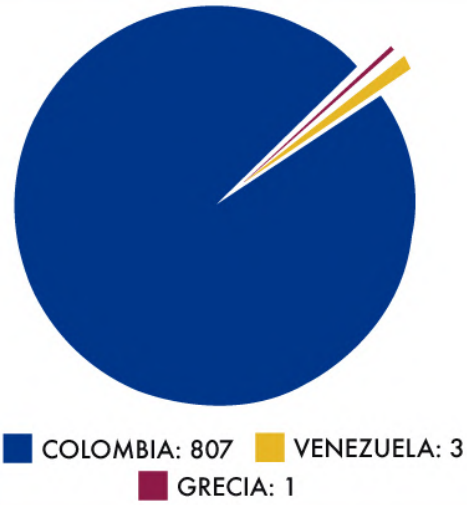
Ilustración tomada de Venepress

Sin embargo, la percepción del cartagenero es otra, hasta el punto de creer que la mayoría de venezolanos llegan a delinquir a su ciudad. Un prejuicio, en parte, alimentado por los titulares de los medios de comunicación locales y por las cadenas de información falsa o descontextualizada que circulan en redes sociales.

Aunque cifras de la Policía y de 'Cartagena, cómo vamos' muestran que en Colombia no todos los delitos son denunciados por los ciudadanos, las denuncias están entre los principales indicadores de las autoridades nacionales y locales para medir la inseguridad y trazar sus planes de acción. Son estadísticas, por lo tanto, que retratan una parte de la criminalidad, tal como lo muestra la siguiente gráfica.

Capturados por delitos varios* en Cartagena

Estadísticas, según el lugar de origen, de las capturas ocurridas entre enero de 2013 y el 9 de noviembre de 2018.



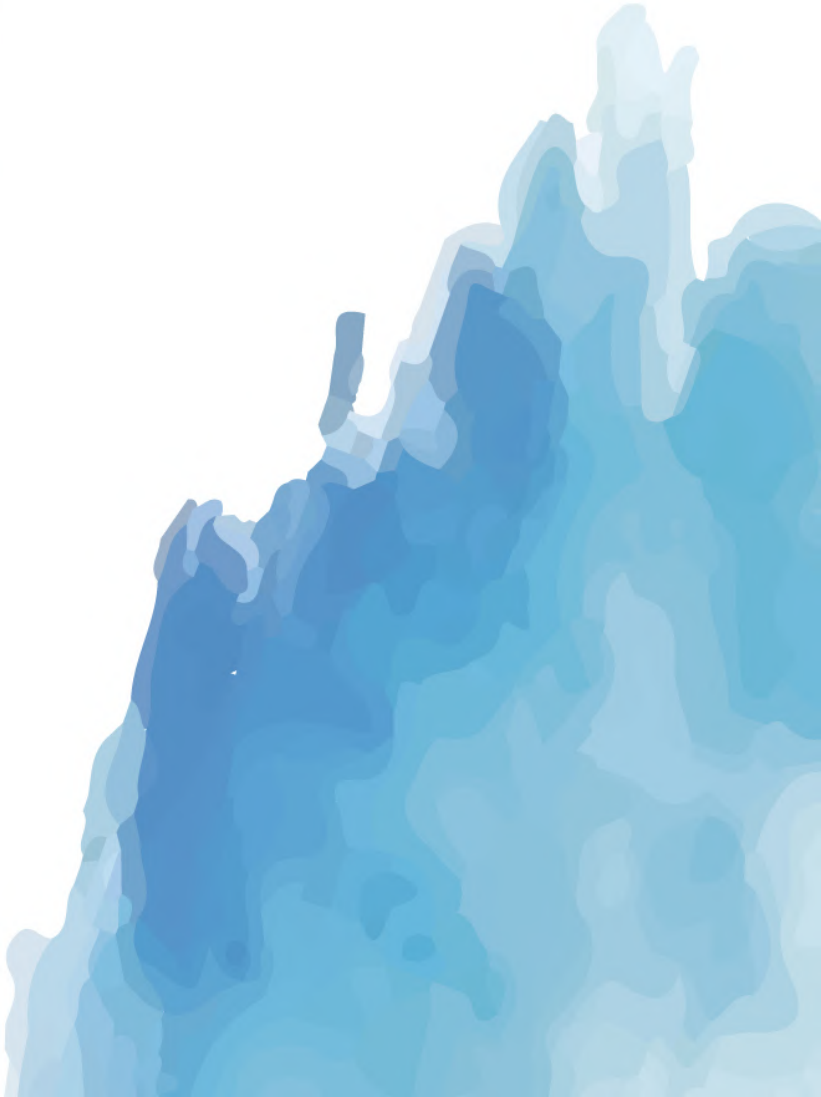
*Delitos que más impactan la percepción de seguridad de la ciudadanía como los homicidios, los atracos, las riñas y la violencia intrafamiliar.

Fuente: Policía Nacional.

Los venezolanos apenas representan el 0,3% de la totalidad de capturas realizadas por la Policía Metropolitana en La Heroica, es decir, son una población poco representativa dentro del crimen cartagenero.

De hecho, estadísticas de la Policía arrojan que los homicidios -principales delitos que impactan en la sensación de inseguridad- ocurren en su mayoría por actos de intolerancia: tres de cada cinco tienen su génesis en hechos de violencia interpersonal. En otras palabras, es la intolerancia la que está poniendo una porción importante de los hechos que aquejan a los cartageneros, según datos de Medicina Legal y la Alcaldía.

Como lo demuestran los datos, la realidad es totalmente diferente al mito urbano y, en cambio, esa creencia generalizada de que "el crimen en Cartagena es culpa del venezolano" solo evidencia una creciente xenofobia entre sus habitantes.



'CREEN QUE LA MAYORÍA SOMOS MALANDROS, QUE VENIMOS A COLOMBIA A QUITARLES EL TRABAJO'.

Atenea Pirele es una joven venezolana que lleva más de un año viviendo en Cartagena. Actualmente trabaja en un restaurante ubicado en el Centro Histórico, y pese a que no ha sido directamente discriminada por los habitantes de la ciudad, sí ha sido testigo de comentarios y estigmas que tienen los cartageneros en contra de sus compatriotas venezolanos.

"He escuchado muchas cosas desde que estoy aquí. Tanto en la calle como en el transporte público dicen que los venezolanos venimos aquí a robar, que la mayoría somos malandros (delincuentes), que venimos a quitarles el trabajo, que las venezolanas (venecas) vienen a quitarle el marido a las colombianas, cosas así.

.Otros conocidos míos tienen más problemas. Apenas dicen de dónde son no les dan el trabajo, aunque a veces se da lo contrario, que sí nos dan un puesto. Es cierto que muchos negocios contratan venezolanos, pero es porque salimos baratos: los seguros, las primas, a nosotros no nos dan nada de eso. En cambio a un colombiano sí hay que pagarle eso por ley. Creo que es ahí donde nace la indignación y discriminación de los colombianos hacia nosotros

Lamentablemente, como el tema de los papeles es complicado, uno no se puede quejar de si le pagan muy poco en el trabajo, porque lo más probable es que termine despedido o deportado. Eso es mucho peor".

**Historia desarrollada como parte de la clase de Gestión de Contenidos Web 2018-II*

El alto precio de vivir lejos de la Venezuela chavista

Hasta 600 mil pesos mensuales por residencias en mal estado, ubicadas en barrios populares de La Heroica, llegan a pagar los venezolanos que huyen del modelo chavista. En una misma casa pueden pernoctar 18 personas, incluso durmiendo en el suelo la mayoría de ellas.

*Daniela Morad, Diorka Martínez, Duván Álvarez y Meryjames Martelo**

Decenas de venezolanos luchan a diario por conseguir 20 mil pesos para sobrevivir en Cartagena. Con esa suma evitan la denigrante situación de dormir en las calles de una ciudad mundialmente conocida por su centro histórico y por el creciente abismo que separa a ese corralito de piedra del resto de sus barriadas.

Con la crisis económica desatada por el socialismo del siglo XXI, la diáspora de venezolanos es cada vez más evidente en las principales ciudades de Colombia, situación de la que Cartagena no es ajena. Desde 2013, según cifras de Migración Colombia, han ingresado a esta ciudad unas 64 mil personas vía terrestre, cuyo tiempo de estadía es difícil de determinar.

Ya es común ver a grupos de venezolanos en las calles de La Heroica, pidiendo limosnas; otros limpiando vidrios o vendiendo dulces en los semáforos. Hombres y mujeres, por igual y de todas las edades, a diario trabajan bajo el inclemente clima del corralito de piedra: una de las cientos de fotografías de la crisis venezolana, que se evidencia en Cartagena y en otras capitales colombianas como Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá y Cúcuta.

A pesar de la ayuda que muchos cartageneros prestan a los venezolanos desplazados por la dictadura de Maduro, su situación sigue siendo precaria. Los días que no consiguen el dinero suficiente para el hospedaje, las personas dueñas de esos lugares los dejan en la calle, algunos con niños, expuestos al peligro y el frío.

Otras por el contrario ofrecen sus viviendas en pésimas condiciones de infraestructura tal como lo evidencian las fotografías que acompañan esta historia y que fueron tomadas por los mismos venezolanos, quienes accedieron a contar sus historias anónimamente para evitar represalias de sus arrendatarios.

Los arrendatarios no permitieron que se les entrevistara, ni que su identidad fuera revelada en este reportaje.

Éstas son las historias de tres venezolanos, que abandonaron su país en busca de una mejor realidad económica. Sin embargo, el precio que están pagando por vivir lejos de la Venezuela chavista es mucho más alto de lo que algún día imaginaron.

CINCO KILÓMETROS A PIE EN BUSCA DEL PAN DIARIO

Yoselyn a secas, sin apellidos, es una de las venezolanas que recientemente ha llegado a Cartagena con la ilusión de mejorar su calidad de vida y la de su hija, una niña pequeña con la que llegó a Colombia. Sin embargo, se encontró con una realidad muy distinta a la que imaginaba. Su subsistencia no ha sido fácil: esta mujer de 26 años camina hasta cinco kilómetros diarios para llegar al centro comercial en el que informalmente vende dulces y bolsas de basura.

"Todos los días no son buenos, a veces me he ganado sólo tres mil pesos… y no me los puedo gastar en transporte… esa es la plata para la comida de mi hija en la noche, mejor me voy caminando hasta la casa y me ahorro esa platica".

Yoselyn llegó de Venezuela con la promesa de trabajar como empleada de una familia, pero al llegar la vacante ya no estaba disponible. Desesperada por no tener el trabajo prometido desde Venezuela por gestión de un familiar, decidió vender dulces y bolsas como un oficio pasajero. Pasan los meses y sigue como vendedora informal ante la escasez de trabajo formal.

De ese pequeño negocio debe sacar los recursos que le permitan pagar el hospedaje y la alimentación.

Yoselyn vive en un pequeño apartamento en el barrio El Pozón, ubicado al sur de la ciudad, que comparte con tres compatriotas suyos. Entre todos pagan 300.000 pesos mensuales de arriendo. Sin embargo, tener un techo asegurado todas las noches no ha sido sinónimo de comodidad: ella y su hija duermen sobre un cubrecama que pudieron traerse de Venezuela. Los dulces aún no le dejan suficientes pesos para comprarse una colchoneta. Aún no logra reunir los cerca de 40.000 pesos que cuesta la más barata

DE ADMINISTRADORA DE ALMACÉN A VENDEDORA AMBULANTE

Con la ilusión de mejorar su calidad de vida y la de su hijo de 10 años, Anyela Suárez tuvo que convertirse en vendedora informal de dulces en el centro histórico de Cartagena. Ese oficio ha sido aún más difícil para ella porque en su Venezuela natal trabajaba como administradora de un almacén.

Al llegar a la ciudad amurallada, Anyela entendió que no iba a ser fácil adaptarse a su nueva realidad. Todas las mañanas, sale acompañada por su hijo a vender dulces. El niño, por ahora, no asiste a la escuela y de las difíciles circunstancias que enfrenta a diario es esa la que más le duele: no poder enviar a su hijo a un aula de clases.

Empezar desde cero es el precio que le ha tocado pagar para poder estar en libertad. Anyela paga 450.000 pesos por una habitación en la que debe dormir en el suelo. Ella prefiere pagar esta cantidad, a tener que dormir junto a su hijo con el estrellado cielo cartagenero como único techo.

"Suplico diariamente para que la situación de mi país cambie pronto", dice esta desesperada mujer.

EL VENDEDOR DE SUPLEMENTOS DEPORTIVOS

"Huir de Venezuela y llegar sin nada a otro país, es el capítulo más duro que estoy pasando en mi vida, que aún después de muchos meses no lo puedo creer". Así es como Raúl comienza contando todo lo que ha vivido desde que llegó hace un par de años a Cartagena.

Raúl era funcionario del gobierno venezolano, pero por haber expresado su molestia por el sistema político, fue perseguido por el chavismo. Le tocó vender todo lo que tenía, salir de su natal Venezuela con su esposa y sus hijos, y llegar a una ciudad que no conocía.

Es uno de los pocos venezolanos que cuenta con permiso laboral, pero pese a tener ese documento no ha conseguido un trabajo estable en Cartagena. Por eso, su única opción para ganarse la vida en Colombia ha sido la venta informal de productos. comenzó con artículos de belleza y más recientemente incursionó en las ventas de suplementos alimenticios para deportistas y personas interesadas en un estilo de vida saludable.

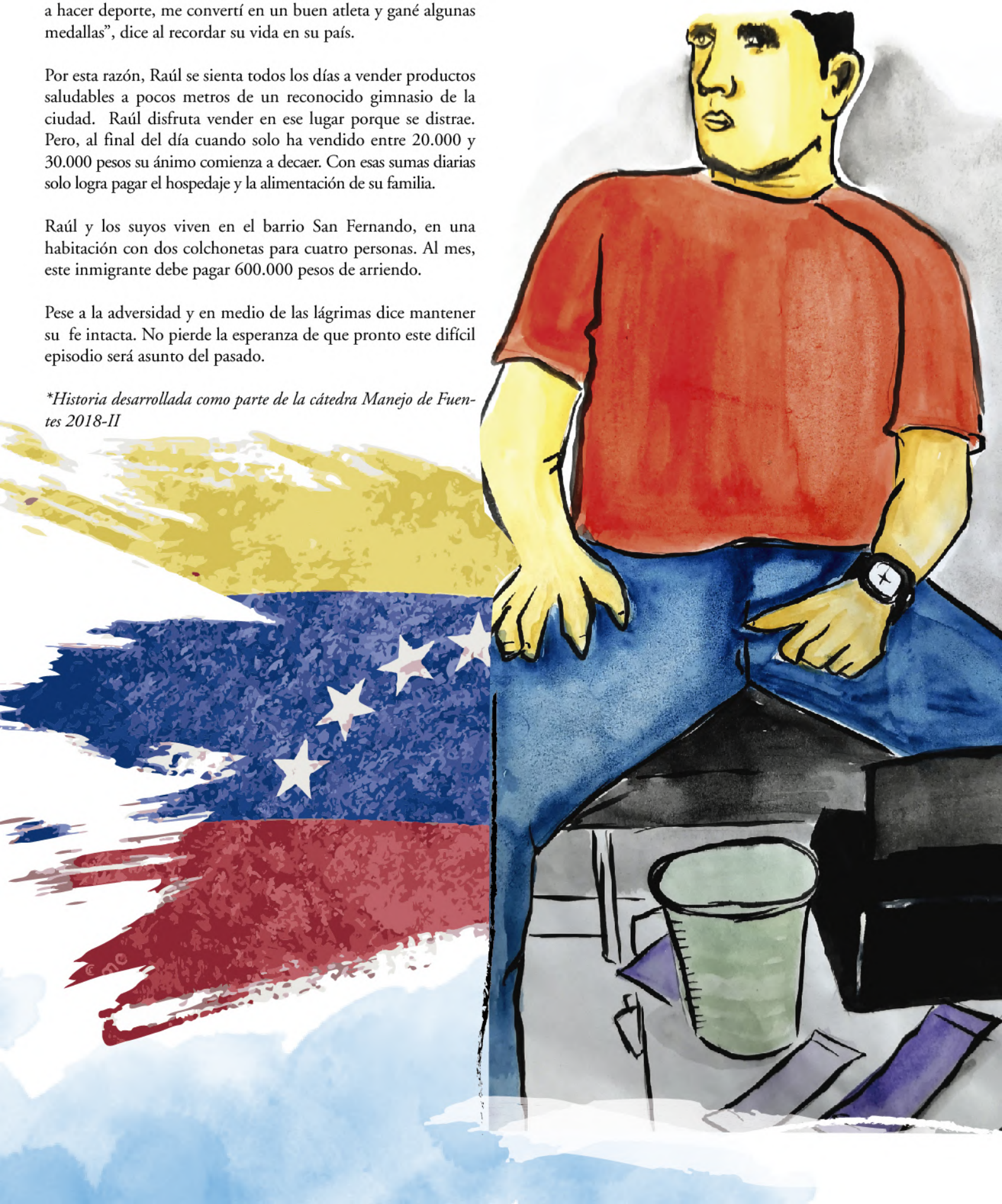
"Además de tener un trabajo estable en Venezuela, me dedicaba a hacer deporte, me convertí en un buen atleta y gané algunas medallas", dice al recordar su vida en su país.

Por esta razón, Raúl se sienta todos los días a vender productos saludables a pocos metros de un reconocido gimnasio de la ciudad. Raúl disfruta vender en ese lugar porque se distrae. Pero, al final del día cuando solo ha vendido entre 20.000 y 30.000 pesos su ánimo comienza a decaer. Con esas sumas diarias solo logra pagar el hospedaje y la alimentación de su familia.

Raúl y los suyos viven en el barrio San Fernando, en una habitación con dos colchonetas para cuatro personas. Al mes, este inmigrante debe pagar 600.000 pesos de arriendo.

Pese a la adversidad y en medio de las lágrimas dice mantener su fe intacta. No pierde la esperanza de que pronto este difícil episodio será asunto del pasado.

**Historia desarrollada como parte de la cátedra Manejo de Fuentes 2018-II*



REVISTA
VISOR
Universidad
Tecnológica
de Bolívar
CARTAGENA DE INDIAS
Programa de Comunicación Social